Expte. N° 3581/2008-1-C.-

Resistencia, 08 de julio de 2025.

Resolución N° 322.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**CASTELAN, CARLOS SANTIAGO C/ WANENSON, MOISES S/ EJECUCION DE SENTENCIA**", Expte. N° 3581/2008-1-C, y

CONSIDERANDO:

I.- Que llegan los autos a este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la parte ejecutada el 28/03/2025, contra la decisión de fecha 19/03/2025. Siendo rechazada la reposición, se concedió el remedio apelativo -en relación y con efecto no suspensivo- el 15/04/2025, habiéndose contestado espontáneamente los agravios el 31/03/2025.

Elevadas las actuaciones, continuaron radicadas ante esta Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (11/06/2025) y notificadas las partes, el 27/06/2025 se llamó autos para resolver.

II.- a) Decisión recurrida. El Sr. Juez aquo en fecha 19 de marzo de 2025, tomando en consideración que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 1083/2024 derogó el Decreto N° 805 y declaró finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas del país, establecida en el artículo 1° de la Ley N° 26.160, así como la suspensión dispuesta en su artículo 2°, dispuso levantar la suspensión del trámite que fuera decretada el 07/12/2010 y continuar el procedimiento según su estado actual.

b) Agravios. Contra dicha decisión se alzó la parte ejecutada. Señala en primer lugar que los Sres. Mariel Luisa Crespo y Ricardo Crespo no han acreditado la calidad de herederos del Sr. Carlos Santiago Castelán, cuestionando de tal forma su legitimidad activa para reclamar sobre el fondo del asunto.

En segundo lugar se agravia debido a que existe una sentencia firme emitida por esta Alzada, en fecha 29 de octubre de 2024, por medio de la cual se procedió a revocar la decisión de primera instancia dictada el día 14/05/2024 y, en consecuencia, hizo lugar al interdicto de recobrar iniciado por el Sr. Moisés Wanenson respecto a la superficie del territorio comunitario que tiene una extensión equivalente a 74,27 hectáreas.

Asimismo, destacó la mención de la Resolución

Expte. N° 3581/2008-1-C.-

2023-144-APN-INAI-#MJ del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), emitida el 09/05/2023, por medio de la cual se aprobó un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la comunidad indígena, ubicada en el Departamento General Donovan, Makallé, Provincia del Chaco.

Mencionó que dicha resolución subrayó el derecho de la comunidad a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para realizar sus actividades tradicionales y de subsistencia (conf. art. 14.1 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales), enfatizando el hecho de que existe un impedimento jurídico firme para llevar adelante desalojo de los predios que habitan ancestralmente.

Por último, señaló que existe una segunda causal de impedimento de desalojo, la cual se funda en la Ley 3811-L, que declara la Emergencia Habitacional en tierras rurales destinadas a la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, por el término de tres (3) años -aprobada el 19 de Abril del año 2023- la que se encuentra vigente desde abril de 2023.

Indicó que dicha normativa amplía la ley N° 2890, disponiendo que deben suspenderse los procedimientos judiciales de desalojo que puedan existir por la propiedad, en lo referido a la posesión uso u ocupación. Esto constituye un "impedimento de desalojo".

III. A) Circumscripta la cuestión en los términos que anteceden, atendiendo al cuestionamiento de fondo incoado, corresponde examinar en primer lugar si los Sres. Mariel Luisa Crespo y Ricardo Crespo poseen legitimación activa para continuar con la ejecución del convenio suscripto entre los Sres. Carlos Santiago Castelán -fallecido- y Abraham Wanenson en fecha 12/04/2000, que fuera homologado el 12/04/2000.

Ello es así, puesto que sólo después de acreditarse las "justas partes" o las "partes legítimas" -condición de admisibilidad intrínseca de toda acción o pretensión- se entra en el juzgamiento del mérito, atendibilidad o fundabilidad de lo pretendido (Conf. Morello, Sosa y Berizonce, Códigos Procesales, t. IV-B, Ed. Platense, 1990, pág. 221 y Sent. N° 118/14, esta Sala).

Liminarmente, se debe decir al respecto que en todo proceso las partes ocupan una posición jurídica doble: existen siempre dos y nada más que dos partes -actora y demandada-, sin perjuicio de que pueden estar conformadas

Expte. N° 3581/2008-1-C.-

por más de un sujeto.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la falta de legitimación se configura cuando una de las partes no es titular de la relación jurídica en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que ésta tenga o no fundamento ("Defranco Fantín, Reynaldo Luis c. Estado Nacional-Ministerio de Economía y otros", Fallos 332:752, La Ley 04/05 2009; La Ley online: AR/JUR/597/2014).-

En dicha línea, ha señalado el Superior Tribunal de Justicia local que "la legitimación que opera como presupuesto de admisibilidad de la acción, exige la acreditación del interés del reclamante, lo que quiere significar que sea titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo en trance de ser menoscabado" (STJ, Sala Constitucional, Res. N° 408/13) (Res. N° 150/20, esta Sala).

Sentado ello, resaltamos desde ya que el planteo invocado no tendrá andamiaje favorable en virtud de los argumentos que se pasan a exponer.

En primer lugar, dable es de destacar que la intervención de los Sres. Crespo se encuentra justificada en razón de su derecho de propiedad compartida, debido a que como copropietarios del bien objeto de autos, están legitimados para ejercer individualmente acciones de desalojo, ya que éstas se consideran actos conservatorios del derecho real de dominio, no extinguiéndose el proceso por el fallecimiento del actor original -Carlos Santiago Castelán-, ya que los Sres. Crespo, como copropietarios, están habilitados para la continuación de la presente acción.

Nótese, en relación a la Sra. Mariel Luisa Crespo, que solicitó su intervención en autos el 04/03/2023 -dado su carácter de copropietaria del inmueble identificado con Nomenclatura Catastral Circunscripción II; Sección B, Chacra 122, Manzana 53, Parcela 3, Parcelas 174 y 175-, conforme lo normado por el artículo 107 del CPCC, dando respuesta el Juzgado a tal solicitud a través de resolución del 22/03/2023, mediante la cual tuvo a la Sra. Crespo por presentada como parte, con patrocinio letrado, otorgándosele la intervención que por derecho corresponda en el carácter invocado. En esa misma fecha, se tomó nota de su pedido de intervención voluntaria y, de conformidad con el artículo 108 del C.P.C.C., se ordenó correr traslado a las partes.

Con posterioridad, el 13/06/2023, el sentenciante concedió

Expte. N° 3581/2008-1-C.-

formalmente la intervención a Mariel Luisa Crespo en las actuaciones, basándose en que se acreditó su legitimación para demandar en el proceso debido a su carácter de condómina del inmueble cuyo desalojo se pretendía. Al no haber existido oposición, su actuación quedó sujeta a los términos establecidos en el artículo 107, párrafo segundo, del CPCC, con los efectos del artículo 109 del mismo cuerpo legal. Esta incorporación fue considerada válida y firme, configurando un litisconsorcio activo legitimado para continuar el proceso.

Por su parte, el Sr. Ricardo Fernando Crespo solicitó su intervención en la causa el 22/04/2023, respondiendo el juzgado mediante providencia del 03/06/2023, a través de la cual se tuvo al Sr. Ricardo Fernando Crespo por presentado como parte, con patrocinio letrado, dándosele la intervención que por derecho corresponda, ordenándose correr traslado a las partes conforme al artículo 108 del CPCC. Al no ser respondido dicho traslado, se procedió a conceder la intervención del Sr. Crespo en las actuaciones (15/04/2025).

Tales circunstancias se encuentran firmes y consentidas en autos debido a que la parte demandada no ha impugnado dicha intervención, lo cual guarda relación con lo acontecido en las causas: 1) **"WANENSON, MOISES c/ CRESPO, RICARDO FERNANDO; CRESPO, MARIEL LUISA s/ INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESIÓN"**, Expte. N° 7040/2022-1-C, donde no se planteó tacha alguna a su legitimación procesal o sustancial; y 2) **"CRESPO, MARIEL LUISA c/ WANENSON, MOISÉS s/ MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR"**, Expte. N° 5373/2023-1-C, donde Mariel Luisa Crespo promovió válidamente la acción cautelar fundándose en su calidad de copropietaria, sin que el Sr. Wanenson desconociera dicha calidad al contestar la medida.

Que, la pretensión de los accionantes y su derecho se justifica y renueva en virtud de la Resolución N° 5/2025 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por medio de la cual se dejó sin efecto el reconocimiento de ocupación indígena sobre una porción de 74,27 hectáreas en Makallé, Chaco, que incluía parte del Lote 175, a raíz de haber incurrido en omisiones documentales que acreditaban la propiedad y ocupación legítima de Mariel Luisa Crespo; validando y reforzando, en consecuencia, su posición como legítima propietaria (condómina) en el proceso judicial de desalojo, fundamentos que -por extensión- resultan de aplicación al Sr. Ricardo Fernando Crespo como copropietario.

Expte. Nº 3581/2008-1-C.-

En orden a lo expuesto, corresponde desestimar las críticas vertidas en torno a que los Sres. Crespo no tiene legitimación activa para continuar con el trámite del presente proceso, confirmando en tal aspecto el fallo en crisis.

B. 1) Que, convalidada la legitimación activa de los accionantes, a los fines de resolver la presente, cabe remarcar que el derecho de propiedad debe ser entendido como un conjunto de potestades que describen lo que los individuos pueden legítimamente hacer o no hacer con los bienes o recursos a su disposición; esto es, la medida en que pueden poseer, consumir, usar, transformar, transferir y excluir a otros de similares facultades (ROJAS, Ricardo M., "La propiedad. Una visión multidisciplinaria e integradora", Ed. Unión Editorial, Buenos Aires, 2021, p. 115 y ss.).

Consecuentemente, el derecho de propiedad implica el reconocimiento de una zona de privacidad por parte del orden normativo institucionalizado, en la cual el titular (individual o grupal) puede ejercer su voluntad (esto es: puede actuar de un modo legítimo y, por tanto, aceptado erga omnes) sobre un bien o recurso sin tener que responder por ello (La propiedad como derecho humano. Los distintos modos de uso y goce; Descalzi, José P.; TR LALEY AR/DOC/197/2025).

En función de lo dicho, cabe traer a colación que la Corte Suprema en la histórica sentencia "Bourdieu" del año 1925 (Fallos 145:307) precisó que:

- La palabra "propiedad" es un término constitucional que debe ser tomado en su sentido más amplio;

- "Cuando se emplea en los arts. 14 y 17 de la Constitución, o en otras disposiciones de ese estatuto, comprende todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad";

- "todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos), a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de 'propiedad'".

A ello debe agregarse que la Constitución Nacional regula dos tipos de propiedades. Por un lado, prevé la propiedad individual (clásica) como un derecho de carácter genérico, inviolable e inalterable, y sujeta su ejercicio a la reglamentación consecuente. Pero también, por otro lado, dispone que

Expte. N° 3581/2008-1-C.-

corresponde al Congreso de la Nación reconocer a los "pueblos originarios argentinos" la "tierra que tradicionalmente ocupan" (propiedad indígena), previendo límites para su uso y goce (inenajenables, intransmisibles e inembargables), y sujeta su ejercicio, también por interpretación sistemática, a la reglamentación que se adopte (BADENI, Gregorio, "Tratado de derecho constitucional", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2006, 2ª ed. act. y ampliada, t. I, p. 830).

Que, tales conceptos también deben ser integrados con una mirada internacional con motivo de la reforma constitucional de 1994 (art. 75, inc. 22, CN), la cual muestra un trasvasamiento del derecho de propiedad individual para sostener la tutela del derecho de propiedad colectiva o indígena.

Así, se puede observar que la propiedad individual se funda en las siguientes normas internacionales: el art. XXIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (OEA: 1948); el art. 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU: 1948); los arts. 1º, 2º y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (OEA: 1969); el art. 5º, inc. d), apart. V, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ONU: 1965) y el art. 1º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU: 1979).

Por su parte, la propiedad (colectiva) indígena se funda, en rigor, en la interpretación jurisprudencial que la Corte IDH ha hecho, en particular, de estas normas: el art. XXIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (OEA: 1948) y el art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (OEA: 1969); tratándose de una interpretación "a la luz" del Convenio N° 169 de la OIT de 1989 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (27) (aprobado en el caso de Argentina por ley nacional 24.071 de 1992) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU: 2007).

2) Sentado así el marco jurídico aplicable al caso concreto, observamos que el meollo del conflicto a resolver radica en determinar si, los elementos jurídicos consistentes en: **a)** decisión dictada el 29/10/2024 por esta Alzada -hizo lugar al interdicto de recobrar iniciado por el Sr. Moisés Wanenson respecto a la superficie del territorio comunitario que tiene una extensión equivalente a 74,27 hectáreas-; **b)** resolución 2023-144-APN-INAI-#MJ del Instituto

Expte. N° 3581/2008-1-C.-

Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), emitida el 09/05/2023 -aprobó relevamiento técnico, jurídico y catastral de la comunidad indígena, ubicada en el Departamento General Donovan, Makallé, Provincia del Chaco-; y **c)** ley 3811-L (declara la emergencia habitacional en tierras rurales destinadas a la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena), constituyen un impedimento legal suficiente que impida llevar adelante el desalojo de los predios objeto de autos.

A fin de dar respuesta a tal interrogante, resulta de elemental importancia hacer referencia al Decreto N° 1083/2024 del Poder Ejecutivo Nacional (09/12/2024), por medio del cual se procedió a la derogación del Decreto N° 805/2021, poniendo fin a una emergencia territorial indígena que suspendía desalojos en tierras ocupadas ancestralmente.

Dicha emergencia, declarada inicialmente en el año 2006 por la Ley N° 26.160 y prolongada por dieciocho años, buscaba proteger la posesión de tierras indígenas.

A raíz de tal situación, es que se dió inicio al expediente administrativo N° E-INAI-50600-2012, en el cual quedó registrado que la comunidad Qom Añi Alba se asentó en la zona en conflicto en el año 1970, aunque posteriormente se realizó un convenio de desocupación -año 2000- con el Sr. Castelán, siendo suspendida su ejecución en virtud de lo reglado por la citada normativa nacional.

En relación a ello, se debe resaltar también que la comunidad realizó el relevamiento territorial dispuesto por el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.), oportunidad en la cual se dictó la Resolución N° 144/2023 del INAI (09/05/2023), por medio de la cual se reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad sobre una superficie georreferenciada de 74,27 hectáreas, incluyendo las parcelas 118, 174 y 175, elementos estos que constituyeron las bases sobre las que se asentó la sentencia N° 489/24 dictada por esta Alzada en el interdicto de recobrar posesión, cuya finalidad fue -como bien lo mencionó el Sr. Juez aquo en la decisión en revisión- restituir la posesión o tenencia de quien fue ilegítimamente despojado, sin que ello importe declarar derechos sustantivos sobre la propiedad del bien.

Ahora bien, el nuevo decreto argumentó que la extensión excesiva de la emergencia generó inseguridad jurídica, afectó el derecho a la propiedad privada y el dominio provincial sobre los recursos naturales, y contribuyó a un

Expte. N° 3581/2008-1-C.-

aumento de conflictos territoriales y usurpaciones violentas, señalando además de la existencia de un uso abusivo del reconocimiento de comunidades indígenas, lo que llevó a un incremento exponencial de inscripciones sin cumplir siempre las condiciones, amenazando los derechos de legítimos propietarios y obstaculizando inversiones.

En orden a tales argumentos, el Decreto N° 1083/2024 derogó explícitamente el Decreto N° 805/2021, dando por finalizada la emergencia territorial indígena y la suspensión de desalojos establecida por la Ley N° 26.160.

Por otro lado, resulta de suma importancia resaltar lo establecido por la Resolución INAI N° 5/2025 que anula la Resolución INAI N° 144/2023 -que había reconocido la ocupación tradicional y pública de la Asociación Civil Comunidad Indígena "Añi Alba de Colonia 54 Nagui Aiem" (Pueblo Qom) en la Provincia del Chaco sobre una superficie georreferenciada-.

La anulación se debió principalmente a la violación del debido proceso y a la omisión de documentación crucial, nulidad que fuera peticionada por la Sra. Mariel Luisa Crespo, copropietaria del inmueble (específicamente la Parcela 3, Parcelas 174 y 175), quien alegó violación de su derecho de defensa y plazo razonable.

En orden a ello, se determinó que no se incorporó documentación con carácter de instrumento público que, de haber sido incluida, habría evitado el relevamiento y georreferenciamiento de parte del Lote 175, propiedad de la Sra. Crespo.

Esta decisión subrayó la importancia de la legalidad, el derecho de propiedad y la necesidad de incorporar todos los antecedentes pertinentes en los procesos de relevamiento territorial.

Además, las observaciones sobre la existencia, denominación y localización de la comunidad indígena, así como la supuesta discordancia del número de integrantes, deberán ser tratadas por los organismos competentes de la Provincia del Chaco, lo que implica una descentralización parcial de la cuestión.

De conformidad a las nuevas normativas dictadas respecto a la cuestión en estudio, resulta evidente que el marco administrativo y jurídico base sobre el cual se dictó la Sentencia 489/24 (29/10/2024) en el expediente N° 7040/2022-1-C caratulado: "**Wanenson, Moisés C/ Crespo, Ricardo Fernando; Crespo, Mariel Luisa S/ Interdicto de Recobrar la Posesión**", fue modificado

Expte. N° 3581/2008-1-C.-

conforme a los parámetros analizados en forma precedente -el Decreto N° 1083/2024 derogó explícitamente el Decreto N° 805/2021; y la Resolución INAI N° 5/2025 anuló la Resolución INAI N° 144/2023-; dándose así por finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, establecida en el artículo 1° de la ley N° 26.160, y la suspensión dispuesta en el artículo 2° de la mencionada ley -a partir de la entrada en vigencia del decreto N° 1083/2024-; circunstancias que sellan adversamente la suerte de los agravios planteados por el demandado recurrente, tal como lo señaló el magistrado de grado.

Por último, señalamos que tampoco tendrá andamiaje favorable la crítica vertida con fundamento en la Ley N° 3811-I, debido a que -como bien lo indicó el sentenciante de grado- la misma no se encuentra vigente según consta en el sistema de información legislativa provincial (<https://digesto.legislaturachaco.gob.ar/Documentos/Ley/VistaPublicaLey/530150>).

Con relación a ello -compartiendo los argumentos del magistrado de grado-, cabe aclarar que la normativa aplicable, en cuanto a la legislación vigente en materia de protección de la agricultura familiar, campesina e indígena, es la Ley 2379-I, que adhiere a la Ley Nacional 27.118, complementada por el art. 124 de la Ley Nacional 27.431.

Sin perjuicio, la citada normativa nacional establece en su artículo 19 la suspensión por tres (3) años de toda ejecución de sentencia y actos procesales o de hecho que tengan por objeto el desalojo de agricultores familiares que al momento de la entrada en vigor de la presente norma se encuentren en condiciones de usucapir las tierras rurales que poseen (el art. 124 de la Ley N.º 27.431 B.O. 2/1/2018 prorroga hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia de dicha suspensión), es decir, que tal norma tampoco se encuentra vigente, perdiendo validez el argumento base de su defensa, lo que determina el rechazo del mismo.

Corolario de los argumentos expuestos, corresponde rechazar los agravios vertidos por el demandado recurrente y, en consecuencia, confirmar el fallo de primera instancia dictado el 19/03/2025.

IV. Las costas en la Alzada se imponen a la parte demandada recurrente vencida (art. 83 del CPCC).

Expte. Nº 3581/2008-1-C.-

En cuanto a los honorarios, no corresponde regulación alguna por tratarse de un recurso de apelación deducido en subsidio de una revocatoria sustanciada y resuelta en la instancia anterior, en consecuencia, no ha mediado labor en esta instancia.

Por ello, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial,

RESUELVE:

I. CONFIRMAR lo resuelto el 19/03/2025 y su ratificación de mediante Resolución de fecha 15/04/2025, en virtud de los argumentos expuestos en los considerandos que anteceden.

II. IMPONER las costas en el orden causado, no regulándose honorarios profesionales en virtud de los argumentos expuestos en forma precedente.

III. NOTIFIQUESE, regístrese, protocolícese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Diego Gabriel Derewicki
Juez-Sala Cuarta
Cámara de Apel. Civ. y Com.

Fernando Adrián Heñin
Juez- Sala Cuarta
Cámara de Apel. Civ. y Com.

El presente documento fue firmado electronicamente por: DEREWICKI DIEGO GABRIEL, DNI: 22002760, JUEZ DE CAMARA, HEÑIN FERNANDO ADRIAN, DNI: 23273906, JUEZ DE CAMARA.